



**SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**  
**AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, quince de junio de dos mil veintiuno**

**S18-094**

Proceso: ORDINARIO LABORAL- APELACIÓN.  
Demandante: **LUIS CARLOS QUINTERO LONDOÑO**  
Demandado: **COLFONDOS S.A.**  
Radicado No.: 05001-31-05-019-2015-01000-01.  
Tema: retroactivo e intereses  
Decisión: **CONFIRMA**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por Colfondos S.A. dentro del proceso de la referencia.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 15 del Decreto 806 expedido el 4 de junio de 2020, en consonancia con los acuerdos proferidos por el Consejo Superior de la Judicatura, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 18** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

**1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

**1.1. LO PRETENDIDO**

Solicitó el demandante mediante este trámite el reconocimiento y pago de la **PENSIÓN DE VEJEZ** a partir del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, junto con los incrementos anuales y las mesadas adicionales, además del otorgamiento de los intereses moratorios regulados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación de las condenas y las costas del proceso.

Valga aclarar en este punto, que en el transcurso del proceso Colfondos S.A. concedió la garantía de la pensión mínima a partir del 1 de junio de 2014, día siguiente al último aporte realizado, reconociendo un retroactivo que ascendió a \$12.044.200 (fl. 146), por lo que la parte

actora solicitó se continuara el proceso determinando si lo procedente era acceder a dicha garantía o una pensión superior, además de lo atinente a los intereses moratorios, los cuales debían ser calculados sobre cada una de las mesadas desde que fueron causadas y hasta la fecha del pago efectivo de las mismas el 23 de diciembre de 2015 (fl. 145).

## **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EN LO QUE INTERESA A LA SALA, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- ✓ Que nació el 4 de abril de 1950.
- ✓ Que desde el 22 de mayo de 1980 comenzó a efectuar aportes al régimen de prima media, alcanzando a cotizar al sistema más de 1600 semanas en las datas y respecto a los empleadores que enlista.
- ✓ Que el 30 de octubre de 1996 se trasladó a Colfondos S.A.
- ✓ Que tuvo diversos inconvenientes que reseña, que incluso desencadenaron la interposición de una acción de tutela resuelta a favor de sus intereses, debido a que su empleador cotizó erradamente al ISS cuando se encontraba afiliado al RAIS, enfrentando diversos obstáculos administrativos tendientes a corregir su historia laboral y establecer qué entidad era competente para reconocer una eventual prestación económica, radicándose la competencia en Colfondos conforme el Decreto 3800 de 2003.
- ✓ Que tal situación dificultó el acceso a una pensión de vejez, pese a su avanzada edad y contar con un cúmulo de semanas que en uno u otro régimen le permitirían acceder a dicha prestación.

## **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Controvirtió COLFONDOS S.A. el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que eran ciertos los relacionados con el traslado precisando que las consecuencias en los errores de los aportes debían imputársele al empleador, aunque en todo caso había realizado las gestiones necesarias ante Colpensiones para obtener el pago de los períodos cancelados administradora disímil a la que se encontraba afiliado. Agrega que el capital del accionante era insuficiente para

financiar una pensión en los términos dispuestos en el art. 68 de la Ley 100 de 1993 por lo que NO tenía derecho al pago de una pensión en el RAIS. Añade que 26 de agosto de 2015, dando respuesta a la comunicación elevada el día 4 del mismo mes y año, informó al demandante que nuevamente había puesto el caso en consideración del área de pensiones *para efectos de verificar la situación*.

#### **1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia proferida el 19 de abril de 2018, el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín condenó a COLFONDOS S.A. a pagar al demandante las siguientes sumas:

- \$28.350 por concepto de diferencia de mesadas retroactivas de la garantía de pensión mínima.
- \$3.391.841 a título de intereses de mora del art. 141 de la Ley 100 de 1993, causados entre el 2 de noviembre de 2014 y el 1 de diciembre de 2015.

Condenó en costas a Colfondos S.A., fijando como agencias en derecho la suma de un SMLMV.

Dentro del término concedido por la ley, Colfondos S.A. interpuso y sustentó recurso de apelación.

### **2. ARGUMENTOS**

#### **2.1. DE LA JUEZ PARA DECIDIR**

Tras referenciar las diferentes modalidades de pensión existentes en el RAIS, explicó que a las mismas se accedía si el asegurado contaba con determinado capital, en caso contrario, sólo contaba con la posibilidad de acceder a la garantía de pensión mínima, previa autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, diligencias que le correspondía adelantar al fondo, sin que el afiliado pudiese asumir las consecuencias de un trámite tardío por parte de la AFP.

En virtud de ello, y descendiendo al caso concreto, la a quo estimó que el actor cumplió 62 años el 4 de abril de 2012, alcanzando a cotizar 1.416 semanas al sistema, las que traducidas a capital no alcanzaban a financiar una pensión del 110% de un SMLMV, de ahí que aquel NO tendría derecho a la prestación por vejez en las diferentes modalidades, solamente a la garantía de

pensión mínima reconocida en el transcurso del proceso a partir del 1 de junio de 2014, día siguiente al último aporte efectuado al régimen pensional, momento en que el actor superaba los 62 años y el mínimo de 1.150 semanas exigidas en la ley, beneficio autorizado por la OBP el 20 de octubre de 2015, teniendo en cuenta 13 mesadas anuales, siendo ingresado en nómina el 1° de diciembre de esa anualidad.

Fue así como consideró que el valor del retroactivo debió ascender a \$12.072.550, siendo cancelados \$12.044.200, adeudando Colfondos al actor la suma de \$28.350, condenando a la entidad al reconocimiento de tal diferencia.

Finalmente encontró procedente acceder al otorgamiento de los intereses moratorios dado la tardanza del fondo al exceder el término de 4 meses concedido en la Ley 100 de 1993, toda vez que la reclamación se efectuó desde el 1 de julio de 2014, contando hasta el 1 de noviembre de tal anualidad para reconocer la prestación inmediatamente, pero el fondo no lo hizo.

## **2.2. RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR COLFONDOS S.A.**

Que no se había probado dentro del proceso que su actuario errase al calcular el retroactivo al momento de reconocer la pensión.

De otro lado, señala que de acuerdo a las normas vigentes para efectos de reconocer la garantía de pensión mínima, art. 3 del Decreto 142 de 2006, que modificó el Decreto 832 de 1996, dicha prestación se reconoce tras la validación por parte de la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por lo que considera que no se podía cargar a Colfondos la mala fe para imputarle intereses moratorios a partir del 2 de noviembre de 2014 cuando la Resolución 14515 de la OBP tan sólo se expidió el 20 de octubre de 2015, a través de la cual se autorizó el otorgamiento de esa garantía para conceder la pensión mínima de vejez al accionante, data desde la cual, conforme los razonamientos de la a quo, deben contabilizarse los 4 meses con los que contaba el fondo para reconocer dicha prestación, lo que sucedió dentro del plazo aludido dado que mediante comunicado del 19 de noviembre de la misma anualidad se informó al actor de la concesión de dicha pensión, precisamente porque el ministerio lo había autorizado siendo este el encargado de suministrar el dinero faltante para financiar la pensión.

En tal sentido reitera que no hubo una mora en el reconocimiento pensional, agregando que si bien el afiliado solicitó la prestación desde el 2014, la ley era clara al establecer que la misma se

reconoce o rechaza en atención al capital que exista en la cuenta, precisamente por ello el fondo negó la pensión por vejez y remitió inmediatamente el caso a la OBP para que determinaran si procedía o no la garantía, entidad que sólo se pronunció en octubre de 2015, y en todo caso reconoció dicha pensión desde junio de 2014, razón por la cual NO es dable acceder a la condena a intereses, insistiendo que la mora sólo se configuraría 4 meses después de la información suministrada por la OBP.

### **2.2.1. ALEGATOS PRESENTADOS POR COLFONDOS S.A.**

Adujo que liquidó y reconoció de manera completa y oportuna la pensión de garantía mínima a la que tenía derecho el demandante, de acuerdo al formato realizado por el actuario, quien tuvo en cuenta la fecha correcta de nacimiento del demandante, la data del último aporte, corresponde al 30 de mayo de 2014 (no simplemente mayo de 2014, como lo sustentó la juez), el valor existente en la cuenta de ahorro individual y el rendimiento obtenido, en atención a lo previsto en la Resolución 1875 de 1997, por lo que NO existía ninguna deficiencia en el reconocimiento del retroactivo pensional.

Aclara que dicha garantía estatal se debe reconocer efectivamente una vez el afiliado cumpla los requisitos de edad (si es hombre los 62 años de edad y si es mujer a los 57 años de edad), pasados cuatros meses luego de radicada la solicitud de pensión conforme al artículo 9 del Decreto 142 del 2006, petición que inicialmente negó dentro de un término oportuno, precisamente por no cumplir los requisitos de capital necesarios en la cuenta de ahorro individual, por lo cual el demandante podría seguir cotizando como dependiente o independiente, hasta lograr alcanzarlo, situación que informó a través de comunicado de julio de 2014, poniéndosele de presente que también se había solicitado a Colpensiones la actualización de la historia laboral respecto de ciertos períodos.

También advierte que hasta este momento el demandante JAMAS había manifestado expresamente a la entidad la imposibilidad de seguir cotizando como dependiente o independiente al RAIS, ni su voluntad de acceder a la pensión de garantía mínima, situación que no fue valorada en debida forma por la a quo.

Agrega que una vez conoció la respuesta de la Oficina de Bonos Pensionales mediante comunicación con radicado 14515 del 20 de octubre de 2014, teniendo en cuenta la solicitud de reconstrucción de historia laboral elevada por el demandante el 4 de julio de 2014, reconoció la

pensión de garantía mínima mediante comunicación fechada el 19 de noviembre de 2015, es decir, 29 días corrientes después de la confirmación de la OBP, autorizando el valor para la garantía mínima de pensión.

De otro lado, recuerda que aportó documentos sobrevinientes a través de los cuales se acreditaba la gestión realizada, así como la solicitud e información que debía ser aportada por el demandante para el reconocimiento de la *pensión de garantía mínima*, documentos que al ser recibidos por la Juez de instancia, debieron ser tenidos en cuenta en relación al cumplimiento y gestión desplegada, solicitando al *ad quem* su valoración.

Que siempre actuó de manera oportuna y dentro de los términos de respuesta y reconocimiento pensional, sin que el demandante se haya podido ver afectado o en su defecto demostrase en el transcurso del proceso afectación alguna por el reconocimiento de su pensión mínima de vejez. Que cumplió con sus obligaciones legales inherentes a la administración de la cuenta individual de la cual es propietario el accionante y ha obrado conforme con las directrices legales establecidas para su objeto social.

Destacó que en la demanda se solicitaba el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, y así quedó señalado en la fijación del litigio al determinar el problema jurídico a resolver, habiéndose probado que la negó dentro del término legal, pretensiones que en parte alguna mencionaban el otorgamiento de la *pensión de garantía mínima*, por lo que no existía sustento fáctico o jurídico para cimentar la condena por intereses moratorios.

En los términos expuestos solicita que sea revocada la decisión apelada y en su lugar sea absuelta de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.

### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

De acuerdo a lo planteado en el recurso alzada, dos son los puntos a tratar. El primero de ellos consiste en establecer si existió un pago deficitario en el reconocimiento del retroactivo pensional concedido administrativamente. El segundo estriba en determinar si es procedente el otorgamiento de los intereses moratorios regulados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, analizando si se configura una mora por parte del fondo cuando justifica el retardo del pago de la garantía de pensión mínima en la espera del concepto favorable por parte de la OBP.

#### 4. CONSIDERACIONES

Para establecer si existe un pago deficitario en la concesión del *RETROACTIVO PENSIONAL*, el punto de partida lo demarca el contenido de la misiva fechada el 19 de noviembre de 2015, cuya copia obra a folios 146 y 147, a través de la cual Colfondos reconoce y paga la garantía de pensión mínima, cuyo tenor, en lo que interesa a esta Magistratura, es:

En relación con su solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez con garantía de pensión mínima, nos permitimos informarle lo siguiente:

Al revisar su historia laboral y los aportes realizados al Fondo de Pensiones Obligatorias de COLFONDOS, se determinó que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, que señala...

Por medio de la Resolución 14515 del 20 de octubre de 2015, la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público reconoció el beneficio de Garantía de Pensión Mínima conforme a lo establecido en el artículo 3 del decreto 142 de 2006, que modificó el decreto 832 de 1996.

Por lo anterior, le informamos que su solicitud de pensión de vejez ha sido APROBADA. Cabe aclarar que no se registran beneficiarios de ley.

Así las cosas, su mesada pensional será igual a \$644.350 pagaderos a partir del mes de diciembre de 2015. La mensualidad se recalculará todos los años en el mes de Enero. Bajo esta modalidad usted recibirá doce mesadas cada año y habrá lugar a un pago adicional en el mes de junio.

Adicionalmente recibirá un pago único por valor de \$12.044.200 que representa las mesadas dejadas de percibir desde el 1 de junio de 2014, toda vez que el último aporte a pensión lo realizó en el mes de mayo de 2014, hasta el 30 de noviembre de 2015.

Bajo este contexto, únicamente nos corresponde verificar si entre el 1 de junio de 2014 y el 30 de noviembre de 2015 se genera un retroactivo de \$12.044.200 teniendo en cuenta el salario mínimo legal vigente para cada anualidad, sin que sea necesario, como lo plantea Colfondos en el recurso de apelación y lo reitera en los alegatos, acudir a un actuario que tenga en cuenta sendas variables (como capital de la cuenta, rendimientos) dado que basta con realizar un simple operación matemática, encontrando que:

RETROACTIVO PENSIONAL					
Año	IPC	# mesadas		Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2014	3,66%	8		\$ 616.000	\$ 4.928.000
2015	6,77%	11		\$ 644.350	\$ 7.087.850
2016	5,75%			\$ 689.454	\$ 0
2017	4,09%			\$ 737.717	\$ 0
2018	3,18%			\$ 781.242	\$ 0
2019	3,80%			\$ 828.116	\$ 0
2020	1,61%			\$ 877.803	\$ 0
2021				\$ 908.526	\$ 0
				TOTAL	\$ 12.015.850

La cifra aludida difiere de la pagada, pareciendo, en principio, que la entidad pagó más de lo debido.

Sin embargo, para entender a qué correspondía los \$12.044.350 que canceló Colfondos S.A., resulta ilustrativo acudir a la información que reposa a folios 148 contentivo del denominado *comprobante de pago de nómina de pensionados*, correspondiente al periodo de noviembre de 2015, donde se indica que el valor a pagar corresponde a la sumatoria de \$644.350 (pago de pensión), más \$11.399.850 a título de retroactivo

RETROACTIVO PENSIONAL					
Año	IPC	# mesadas		Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2014	3,66%	7		\$ 616.000	\$ 4.312.000
2015	6,77%	11		\$ 644.350	\$ 7.087.850
				TOTAL	\$ 11.399.850

RETROACTIVO PENSIONAL					
Año	IPC	# mesadas		Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2014	3,66%	7		\$ 616.000	\$ 4.312.000
2015	6,77%	12		\$ 644.350	\$ 7.732.200
				TOTAL	\$ 12.044.200

Quiere esto decir que ciertamente la demandada pagó a título retroactivo pensional la suma de \$11.399.850, cuando el mismo debía ascender a \$12.015.850, generándose una diferencia de \$616.000 que realmente corresponde a la mesada adicional de 2014, anualidad en que el fondo sólo canceló 7 mesadas, cuando debían ser 8 toda vez que la prestación se concedió administrativamente a partir del 1 de junio de ese año; la misma fue mal denominada por la



entidad al reconocer la pensión *como pago adicional del mes de junio*, cuando conforme lo regulado en el Acto legislativo 01 de 2005, la que a hoy pervive es la mesada adicional del mes de diciembre, descrita en el art. 50 de la Ley 100 de 1993, se insiste, no así aquella que en su momento definió el art. 142 *ibídem*.

En todo caso, se adeuda una mesada del año 2014, tasada deficitariamente por la a quo en \$28.350, sin que sea dable a esta Magistratura modificar la decisión adoptada en primera instancia este punto en virtud de los postulados del principio de la *no reformatio in pejus*, dado que la única parte con interés para recurrir en tal sentido la tasación, guardó silencio, únicamente mostró inconformidad Colfondos bajo el ropaje que nada debía, siendo apelante único, de ahí que por razones diferentes a las planteadas por la falladora, se ha de CONFIRMAR la providencia en tal aspecto.

Aclarado lo anterior, esta Magistratura procede a examinar la pretensión accesorio relativa a la procedencia de los **INTERESES MORATORIOS**.

Sabido es que, al tenor de lo dispuesto en el art. 141 de la Ley 100 de 1993, los mismos se causan por la simple mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales. Inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la prestación se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender a criterios de buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico. Sin embargo, tal posición se fue morigerando a partir de la sentencia con radicado 44.454 del 2 de octubre de 2013, dada una nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que dichos intereses no eran procedentes en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encontraran justificadas, bien sea porque tuvieran respaldo normativo o porque su postura proviniera de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

Bajo este contexto, la Sala examinó el contenido de la misiva antes transcrita sin encontrar razones atendibles que justificaron la mora en el reconocimiento de la garantía de pensión mínima. Veamos porqué.

Inicialmente es importante mencionar, contrario a la postura de la entidad, que cuando un afiliado eleva una solicitud de reconocimiento de pensión de vejez en el RAIS indiscutiblemente debe partirse de la premisa que NO se está circunscribiendo alguna de las siete modalidades, esa

labor que le compete a la administradora quien estará en la capacidad de explicarlas, para que el solicitante, si cumple los requisitos señalados en la ley, opte por la de su conveniencia, asesoría que con mayor razón debe abarcar la posibilidad de acceder a la garantía de pensión mínima cuando, como en este caso, el afiliado NO cuenta con el capital necesario para acceder a algo diferente.

Y es que NO es objeto de discusión que en virtud de la edad y el número de semanas cotizadas, al señor Luis Carlos Quintero le asiste derecho a percibir la garantía de pensión mínima consagrada en el art. 65 de la Ley 100 de 1993, prerrogativa de la que gozan aquellos afiliados que no cuentan con el capital suficiente en su cuenta de ahorro individual para sufragar una pensión de vejez<sup>1</sup>.

La existencia de estos supuestos faculta a la Nación para *completar* el capital faltante que permite al afiliado obtener la pensión, pues ante la inexistencia de dicho subsidio no podría acceder a la misma. El artículo 60 ibídem señala como característica del Régimen de Ahorro Individual el desarrollo del principio de solidaridad a través de la creación de la garantía de la pensión mínima cuando señala que *“el Estado aportará los recursos que sean necesarios para garantizar el pago de pensiones mínimas cuando la capitalización de los aportes de los afiliados y sus rendimientos financieros fueren insuficientes y aquéllos cumplan las condiciones requeridas para tal efecto”*; empero, dicho subsidio realmente sale de las arcas de los restantes afiliados a tal régimen, aunque inicialmente el pago de cada mesada se realiza con cargo al saldo de la cuenta de ahorro individual del asegurado y solamente cuando se agote el capital es que se debe disponer de la reserva del Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

Lo anterior por cuanto, en una clara expresión del desarrollo del principio de solidaridad y relevo generacional, la fuente de financiación de ésta garantía emana del porcentaje que de cada cotización se destina para la creación de la cuenta que en algún momento engrosará el Fondo de Garantía de Pensión Mínima; para el año 2003 era un 0.5%, a partir de la reforma introducida por la Ley 797 de 2003 se aumentó en un punto el porcentaje, por lo que actualmente de cada

---

<sup>1</sup> La Ley 100 de 1993 en artículo 65 estipuló que: *Los afiliados que a los 62 años de edad si son hombres y 57 si son mujeres, no hayan alcanzado a generar la pensión mínima de que trata el artículo 35 de la presente Ley, y hubiesen cotizado por lo menos 1.150 semanas, tendrán derecho a que el Gobierno Nacional, en desarrollo del principio de solidaridad, les complete la parte que haga falta para obtener dicha pensión.*

*PARAGRAFO. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo se tendrá en cuenta lo previsto en los párrafos del artículo 33 de la presente Ley*

Como requisitos generales para acceder a la pensión de vejez en el RAIS se adujo en el artículo 64 ibídem que los afiliados al mismo se podrían pensionar a la edad que éstos escogieran, siempre y cuando *“el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual les permita obtener una pensión mensual, superior al 110 % del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de esta Ley, reajustado anualmente según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE. Para el cálculo de dicho monto se tendrá en cuenta el valor del bono pensional, cuando a éste hubiere lugar”*.

Empero, a partir del año 2012 el 110 % del salario mínimo legal mensual vigente en el año 1993, fecha de expedición de la Ley 100, reajustado anualmente con base en el IPC, equivale a \$562.470, suma que es inferior al mínimo legal mensual del año 2012, \$566.700. Ésta dificultad se generó porque existe una variación porcentual entre el aumento del IPC y el aumento del salario mínimo legal, que para algunas anualidades ha sido superior al IPC.

cotización se destina un 1.5%, dinero que realmente está en manos de cada administradora, a la espera del funcionamiento efectivo de la entidad que los administre y la ley que los reglamente.

De otro lado, el artículo 9 del Decreto 832 de 1996, modificado por el artículo 2° del Decreto 142 de 2006, estableció los “*Mecanismos de pago de la Pensión Mínima de Vejez en el Régimen de Ahorro Individual*”, identificando minuciosamente el procedimiento que se debe seguir cuando se otorga esta garantía, desarrollando a su vez lo normado por el art. 83 de la Ley 100 de 1993, imponiendo a las AFP determinadas obligaciones relativas al suministro de información **oportuna** a la Oficina de Bonos Pensionales (OBP).

Aclarado lo anterior, descendiendo al caso que comporta objeto de análisis por parte de la Sala, tenemos que conforme la copia del folio del Registro Civil de Nacimiento (fl. 59), el señor Luis Carlos Quintero nació el 5 de abril de 1950, cumpliendo 62 años el mismo día y mes del año 2012.

Para esa anualidad, de acuerdo a la copiosa prueba documental, existían diversos inconvenientes con la corrección de la historia laboral, dado que un empleador efectuó aportes a fondo disímil al que se encontraba afiliado su subalterno, inconvenientes que finalmente se superaron pero que incidieron, por lo menos para julio de 2014, en la negativa de la garantía de pensión mínima (fl. 133), al contar el afiliado, aparentemente, con menos de 1.150 semanas cotizadas, habiéndole ofrecido con antelación, 23 de abril de 2014 (fl. 137) la devolución de saldos.

No obstante lo anterior, conforme consta en los documentos allegados con la contestación, concretamente a folio 139 a 143, se aprecia que Colfondos internamente anota en sus archivos que el solicitante ha pretendido en dos ocasiones el reconocimiento de la pensión de vejez, 19 de noviembre de 2013 y 23 de abril de 2014, ambas rechazadas por *capital*, pero que tiene más de 1150 semanas con el bono acreditado según sistema, requiriendo al área de pensiones para verificar *gpm*, siglas que para el caso deben entenderse como garantía de pensión mínima.

Es así como el 26 de agosto de 2015 (fl. 143) le comunican al señor Luis Carlos que el caso fue sometido a reconsideración, para finalmente ser reconocida la prestación a través de misiva del 19 de noviembre de tal anualidad (fl.175).

La Resolución 14515 que emana de la Oficina de Bonos Pensionales, en efecto expedida el 20 de octubre de 2015 como lo predica el recurrente, mediante la que se autoriza el otorgamiento

del beneficio, expresamente señala que el pago se atenderá con cargo a los recursos recaudados por el fondo, una vez se haya agotado el dinero de la cuenta de ahorro individual, dado que el afiliado contaba con 1.416 semanas cotizadas (690,86 al ISS más 726 al fondo) y un saldo en la cuenta de \$90.618.634.

Nótese entonces cómo realmente las diligencias ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público NO comportaron una barrera para el reconocimiento oportuno de una prestación que incluso había sido pretendida desde el año 2013, realmente las trabas de la administradora que propiciaron múltiples respuestas en contra de los intereses del peticionario, estribaron en la errada contabilización de las semanas correspondientes al bono pensional, con las que superaba en demasía las exigidas por el legislador para acceder a la prebenda requerida, incluso ante la desesperada necesidad del afiliado por corregir su historia laboral, el fondo descargaba en manos del empleador la responsabilidad exclusiva de la normalización del reporte, pero ahora, a través del recurso de alzada, bajo el ropaje de la tardanza del ministerio, pretende escudar la mora, cuando realmente la OBP dio un trámite ágil a las diligencias que comenzó a realizar Colfondos ante tal ente ministerial el 5 de octubre de 2015 (fl. 178 y 204), obteniendo un pronunciamiento el día 20 del mismo mes y año, de ahí que carezcan de veracidad múltiples de las afirmaciones que lanza el apoderado de la entidad en el recurso de alzada cuando afirma que realizó las gestiones a su cargo y ante la OBP, en forma inmediata tras la solicitud de pensión, pues realmente ello aconteció más de dos años después de la primigenia reclamación.

En otras palabras, NO se cuestiona que la administradora, para efectos de reconocer esta garantía, este sometida al concepto favorable del ministerio conforme lo ordenan los Decretos 832 de 1996 y 142 de 2006; si mediase un concepto tardío, indiscutible sería que la mora NO devendría del actuar del fondo. Empero, si por el contrario, como sucede en este caso, se radica una última petición por parte del afiliado el 23 de abril de 2014, el fondo analiza erradamente el caso, y transcurridos mucho más de 4 meses que estipula el art. 9 de la Ley 707 de 2003 para pronunciarse en forma favorable, se percata de sus falencias y solicita la autorización del ente ministerial, quien la otorga 15 días después de que el fondo radicase la correspondiente documentación, NO puede palpase alguna razón atendible que justifique la tardanza en la concesión del retroactivo pensional que finalmente ingresó al patrimonio del pensionado el 1 de diciembre de 2015 cuando fue incluido en nómina, pese a cumplir las exigencias desde el 1 de junio de 2014, día siguiente al último aporte efectuado al régimen pensional, data a la que precedían dos reclamaciones.

Bajo este contexto, no son los 29 días que trascurrieron entre la emisión de la resolución expedida por la OBP y la concesión por parte de Colfondos de la prestación, los que demarcan la mora, sino los 575 días que tardó en pronunciarse favorablemente, contabilizados del momento de la reclamación y el reconocimiento de la prestación, los que evidentemente excedieron el término de 4 meses que contempla la ley.

Aunado a ello, en nada interesa, contrario a lo aludido en los alegatos presentados en esta instancia, que el afiliado expresamente NO hubiese manifestado al fondo su voluntad de no querer continuar cotizando, de un lado, porque en parte alguna se previó tal manifestación como un requisito para tener derecho a acceder a la garantía de pensión mínima, tampoco fue exigido tal documento por la entidad, si es que lo considera imprescindible, y de otro lado, ha de entenderse esa voluntad inequívoca del peticionario, cuando acude a la entidad en aras de obtener una prestación por vejez.

Incluso, si contásemos 4 meses a partir del 23 de abril de 2014, día de la reclamación, tendríamos que dichos intereses habrían de liquidarse desde el 24 de agosto de tal anualidad, y no a partir del 2 de noviembre como lo tasó la a quo, quien parece haber contabilizado el plazo otorgado en la ley teniendo en cuenta la fecha de disfrute de la prestación, no así la de la petición elevada por el usuario, punto que por las mismas razones expuestas en cuanto al retroactivo, no se habrá de modificar.

En consecuencia, la decisión adoptada en primera instancia será **CONFIRMADA** por encontrarla ajustada a los antecedentes normativos y jurisprudenciales que se han expedido en torno al tema.

Se condenará en costas en esta instancia a Colfondos S.A., por no haber tenido éxito en el recurso. Se fijarán como agencias en derecho la suma de \$908.526.

## 5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

**PRIMERO: CONFIRMA** la sentencia proferida el 18 de abril de 2018 por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín dentro del proceso ordinario laboral instaurado por el señor **LUIS**


**CARLOS QUINTERO LONDOÑO** identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 15.350.364 contra **COLFONDOS S.A.**, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO:** costas en esta instancia a cargo de Colfondos S.A. y a favor del actor. Se fija como agencias en derecho la suma de \$908.526.


Lo anterior se notificará en **ESTADOS**, y se firma por quienes en ella intervinieron.

(Firmas escaneadas)

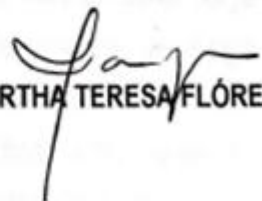
Los Magistrados,



**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**



**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**

**CERTIFICO:** Que la providencia anterior fue notificada por  
ESTADOS No. 103 fijados hoy en la secretaría de  
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 16 DE JUNIO DE 2021

\_\_\_\_\_  
**Secretario**

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>